

Actitud y conducta: los electores del Distrito Federal en 1997

Nicolás Loza Otero*

En la democratización del régimen político mexicano, las elecciones federales de 1997 fueron especialmente importantes. La victoria del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la capital del país, junto con la pérdida del control unificado de las cámaras del Congreso de la Unión por el entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), mostró que las instituciones de la reforma electoral del año anterior permitían comicios limpios, confiables y satisfactorios.¹

La primera elección por voto universal directo y secreto del jefe de gobierno del Distrito Federal (DF) en 1997 alteró las tendencias pasadas, que habrían producido la victoria del PRI y una fuerte competencia entre el PRD y el Partido Acción Nacional (PAN) para ser la primera oposición local. ¿Qué llevó a la mayoría de los ciudadanos a votar por el candidato del PRD?, ¿cómo influyó el juicio sobre el desempeño gubernamental y el sistema político en la preferencia electoral?, ¿cuál fue el papel del cálculo estratégico? Una explicación estándar atribuye al votante la capacidad de juzgar el desempeño del partido en el gobierno y optar entre continuidad y cambio. Sin embargo, en elecciones fundadoras los votantes pueden estar eligiendo un tipo de régimen y no sólo un

* Universidad Autónoma de Zacatecas.

¹ Véase Elizondo y Nacif, "La lógica del cambio político en México", en Carlos Elizondo y Benito Nacif (comps.), *Lecturas sobre el cambio político en México* México, CIDE/FCE, 2002, pp. 7-38. Para mi postura véase "El revés de la trama: violencia, desconfianza y autointerés en la democratización mexicana", *Este País*, marzo, 2000.

gobierno,² por lo que las percepciones del desempeño gubernamental se anudan al respaldo del sistema político como un todo, llevando al centro el problema de la legitimidad.

En este artículo se describen las creencias de los ciudadanos en torno a la legitimidad y popularidad del sistema político, la presidencia de la república y el PRI entre 1995 y 1997, y se examinan los efectos de éstas y otras actitudes de corte instrumental y estratégico sobre el comportamiento electoral. En el plano empírico más general, el interés de este trabajo se centra en el elector y las motivaciones de su acción: la propuesta central es que en la elección de 1997 en el DF el apoyo discursivo al régimen, particularmente la legitimidad del PRI, discriminó las preferencias electorales por éste u otro partido, pero en la selección de la opción opositora el factor estratégico resultó decisivo. Dicho de otro modo: *el PRI perdió por la erosión de su legitimidad; ePRD ganó por la expectativa estratégica de su victoria.*

La construcción de la problemática del trabajo informa su contenido e intereses teórico-metodológicos: utilizando heurísticamente el individualismo metodológico se tratarán de comprender la relación entre actitudes y acciones, así como los vínculos entre distintas actitudes conforme a sus fuentes motivacionales y/o la figura política a que se orientan.³ Debilitando el supuesto de monomotivación de las teorías de la acción racional, se intenta articular una explicación generalizable a situaciones electorales semejantes: se busca probar que las actitudes no conducen automáticamente a la acción, que acciones aparentemente instrumentales nacen de la mixtura motivacional y que no todas las evaluaciones del sistema y sus autoridades tienen el mismo efecto sobre la preferencia electoral, pues en la interacción aparecen conductas que desplazan a segundo plano las actitudes previas. En el terreno técnico, se utilizan datos agregados e individuales, examinados mediante correlaciones simples y regresiones logísticas binarias, respectivamente.

En la primera parte del artículo se ofrece un apunte acerca de la legitimidad, el apoyo político discursivo, sus formas y contenidos, informándose de los indicadores que habrán de usarse. En seguida se presenta el estado de estos indicadores en junio de 1997 y su evolución los dos años anteriores, haciendo algunas comparaciones internacionales, nacionales y locales para enmarcar las cifras. Por último, se contrasta la influencia sobre el comportamiento electoral del apoyo discursivo al régimen, las evaluaciones de bolsillo, las orientaciones democráticas, la ideología, los niveles de conciencia y las consideraciones estratégicas.

² Jorge Buendía, "Incertidumbre y comportamiento electoral en la transición democrática", *Política y Gobierno*, vol. IV, núm. 2, México, CIDE, segundo semestre de 1997, p. 350.

³ Aunque reclamaría una anotación más extensa, se utilizarán como sinónimos *actitud*, *disposición* y *disposición discursiva*.

DISCURSIVIDAD Y ACCIÓN

En su sentido estricto, legitimidad refiere las creencias que aproximadamente comparten gobernantes y gobernados acerca del derecho de mando de los primeros y el deber de obediencia de los segundos; en su sentido amplio, implica la aprobación o satisfacción que una figura política genera. Conforme a la tradición weberiana, se distingue entre motivaciones racionales y no racionales, incluyendo en estas últimas la tradición, la emoción, el hábito y otras creencias no reflexivas. Analíticamente, la legitimidad en su sentido estricto podría estar motivada por creencias racionales y no racionales; en su dimensión amplia, comporta el juicio instrumental; empíricamente, la mixtura de motivaciones es la norma antes que la excepción.⁴

En 1963, Almond y Verba definieron la cultura política como un conjunto de patrones de orientación psicológica que pueden ser de naturaleza cognitiva, afectiva o evaluativa: los primeros son conocimientos y creencias; los segundos, sentimientos; los últimos, opiniones que combinan “valor y criterio, con información y sentimientos”.⁵ Cuatro décadas después, al distinguir creencias instrumentales y afectivas, Dalton asoció la popularidad presidencial, la satisfacción con el funcionamiento del régimen, los juicios sobre el desempeño de las instituciones, la confianza institucional y en los partidos políticos a la dimensión racional de las creencias, asimilando al componente afectivo el orgullo nacional, los valores democráticos, las normas de participación, las expectativas institucionales, el apoyo a partidos, los sentimientos hacia los líderes y la identificación partidaria.⁶

De los indicadores que se usan, uno de los más empleados es la satisfacción con el funcionamiento de un régimen que refiere el sentido amplio de legitimidad: para Weil indica legitimidad democrática;⁷ para Dalton implica evaluaciones racionales. En el campo de las teorías de la elección racional, la acción que satisface suaviza la racionalidad. Aquí se considera un juicio instrumental (cuadro 1, renglón A).

⁴ La psicología cognitiva define la emoción como “pensar semiológico”, y sostiene que “la emoción y el pensamiento (racional) están íntimamente relacionados”. Véase Ellis y Harper, *Psicoterapia racional emotiva*, México, Herrero, 1962, p. 29. Elster refiere mecanismos *calientes* o no racionales, y mecanismos *fríos* o racionales de formación de creencias, así como sus influencias y combinaciones. Véase *Psicología política*, Barcelona, Gedisa, 1995.

⁵ Almond y Verba, *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*, Princeton, Princeton University Press, 1963, p. 15.

⁶ Dalton, “Support in Advanced Industrial Democracies”, en Pipa Norris (ed.), *Critical Citizens: Global Support for Democratic Governance* Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 58.

⁷ Frederick Weil, “The Sources and Structure of Legitimation in Western Democracies: A Consolidated Model Tested with Time-Series Data in Six Countries since World War II”, *American Sociological Review*, vol. 54, octubre, pp. 682-706.

CUADRO 1 *Figuras y dimensiones de los indicadores del apoyo político*

	Objeto	Indicador	Motivación
<i>Sistema</i>			
A	Satisfacción	¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se siente con nuestro sistema de gobierno, es decir, con la forma en que funcionan de conjunto la Presidencia de la República, las cámaras de Diputados y Senadores, el poder judicial y los partidos políticos en México?	Racional
B	Legitimidad	En general, ¿por cuál de las siguientes opciones obedece al actual gobierno? Porque es la autoridad que los mexicanos eligieron, porque está formado por gente que busca el beneficio de la mayoría, porque está formado por gente preparada, porque de no obedecer sería castigado, no lo obedece.	Mixta
<i>Presidencia</i>			
C	Popularidad retrospectiva	En general, ¿cuál es su opinión de Zedillo?	Mixta
D	Popularidad prospectiva	Hacia el final del sexenio de Zedillo, ¿cree usted que las cosas estarán mejor o peor?	Mixta racional
E	Legitimidad	¿Con cuál de las siguientes afirmaciones estaría más de acuerdo?: El presidente Zedillo tiene derecho a gobernarnos porque fue electo por la mayoría de los mexicanos, es una autoridad que busca el beneficio de la mayoría, es una persona preparada, no tiene derecho a gobernarnos.	Mixta
<i>PRI</i>			
F	Legitimidad	Y en estas elecciones, ¿por cuál partido no votaría?	Mixta
G	Popularidad	Si hoy fuese la elección de jefe de Gobierno, ¿por qué partido votaría?	Mixta racional

La popularidad presidencial es generalmente tratada como juicio racional. Downs refiere comparaciones de utilidad que consisten en calificar el desempeño gubernamental⁸ y cuyas operacionalizaciones corrientes conducen a lo que Fiorina llamó *juicio retrospectivo mediado*⁹ que es la evaluación del trabajo presidencial (cuadro 1, renglón B). MacKuen atribuyó mayor contenido racional al juicio prospectivo que al retrospectivo, toda vez que el primero introduce un horizonte de expectativas (cuadro 1, renglón C).¹⁰ Paradójicamente, para

⁸ Anthony Downs, *An Economic Theory of Democracy*, EUA, Harper Collins, 1957, p. 38.

⁹ Citado por Magaloni en Jorge Domínguez y Alejandro Poiré, *Toward Mexico's Democratization: Parties, Campaigns, Elections, and Public Opinion*, Nueva York, Routledge, 1999, p. 218.

¹⁰ MacKuen, Erikson y Stimson, "Peasants and Bankers: The American Electorate and the U.S. Economy", *American Political Science Review*, núm. 86, 1992, pp. 597-611.

Dalton las expectativas en torno al desempeño institucional son más afectivas que racionales. En mi perspectiva, con la jerga de Almond y Verba, la popularidad presidencial podría calificarse de actitud evaluativa, en donde el juicio racional es distorsionado mas no suprimido por el vínculo afectivo que los gobernados tejen con sus autoridades.

La intención de voto es el testimonio individual de la acción colectiva en que será evaluada la influencia de las disposiciones sobre el comportamiento. Las escuelas electorales atribuyen diferentes resortes motivacionales a la preferencia; Dalton la califica de afectiva; la tradición de la elección racional la piensa instrumental; aquí se considera mixta (cuadro 1, renglón G).

En cuanto a la legitimidad estricta, la contraintención de voto como indicador de legitimidad partidaria fue utilizada por Levite y Tarrow¹¹ y su contenido motivacional parece mixto, aunque es asunto empírico determinar cuándo pesa más lo racional que lo no racional (cuadro 1, renglón F). En el supuesto de maximización situación por situación, el individuo decide con información óptima y no cabe dejar de votar por *X*, que ofrece mejores rendimientos que *Y*, sencillamente porque *ex ante* se decidió *nunca* hacerlo. Downs señala que los votantes no muy interesados en política pueden racionalmente guiarse por su ideología o prácticas pasadas, las opiniones de expertos o la conducta esperada de la mayoría: estos *atajos* ahorran costos de información e implican reflexión, por lo que no pueden considerarse predisposiciones. Quien vota como lo ha hecho en el pasado, decidió ahorrar costos en t_n , empleando para este periodo la información obtenida en t_{n-1} ; quien vota como los demás, ahorra costos sobre el supuesto de que la mayoría reúne y evalúa información adecuadamente; quien sigue las opiniones de los expertos, elige primero a sus expertos; quien vota ideológicamente extrapola su juicio sobre la utilidad que produce el partido *X* en el tema *g*, a la utilidad que produciría en los temas *h*, *i* hasta *n*. En cambio, quien expresa que nunca votaría por *X* descarta la posibilidad de reconocer que en el futuro o para un asunto emergente podría ser lo mejor, por lo que dicha creencia no debiera atribuirse al conocimiento.

Por sus motivaciones, la legitimidad estricta del sistema y el presidente podrían calificarse como mixtas. Buchanan y Tullock la consideran producto del acto constitucional que deriva del auto interés y el cálculo racional;¹² para Easton es la convicción en la validez moral de un régimen.¹³ En el campo operacional

¹¹ Ariel Levite y Sidney Tarrow, "The Legitimation of Excluded Parties in Dominant Party Systems: A Comparison of Israel and Italy", *Comparative Politics*, vol. 15, núm. 3, Nueva York, University of New York, abril, 1983, pp. 305 y 314.

¹² Buchanan y Tullock, *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy*, EUA, The University of Michigan Press, 1962, p. 58.

¹³ David Easton, "A Re-Assessment of the Concept of Political Support", *British Journal of Political Science*, núm. 5, Gran Bretaña, 1975, p. 452.

las diferencias se multiplican, pues preguntas de comparación entre regímenes, acerca de valores, sobre la satisfacción o la confianza que generan distintas figuras políticas se utilizan indistintamente como indicadores de legitimidad.¹⁴

Aquí se construyen dos indicadores experimentales que suponen mixtura de motivaciones. Para la legitimidad del sistema (cuadro 1, renglón B) se pidió referir las prácticas y razones de la obediencia; para el presidente se solicitó acuerdo con las afirmaciones que justifican su derecho a gobernar (cuadro 1, renglón E): declarar obediencia al sistema o derecho de gobernar al presidente porque hubo elección democrática revelaría aceptación de la regla de mayoría, así como un juicio de hecho de su cumplimiento; justificarla por la preparación del gobernante implica preferencia por una regla no democrática en que la cualidad, que se juzga existente, es más importante que el procedimiento; legitimarla porque busca el beneficio de la mayoría es recurrir a otra cualidad del gobernante que también se supone existente. En la frontera de la legitimidad, obedecer por temor al castigo es poder sin legitimidad o predominio de un criterio instrumental como fuente de legitimación. Por último, decir que no se obedece o que no hay derecho de mando son formas de negar legitimidad.

EL RESPALDO ACTITUDINAL AL RÉGIMEN POLÍTICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

¿De qué respaldo actitudinal gozaba el sistema político mexicano entre los pobladores adultos del DF en junio de 1997? Para entonces, alrededor de 72.7% concedía legitimidad a la presidencia del país, pero sólo 48.4% tenía una opinión positiva de su titular.¹⁵ Del régimen político, 5 de cada 20 personas habrían expresado satisfacción con su funcionamiento y 13 no dudarían de su legitimidad. Este par de evaluaciones diferenciadas ilustraba la combinación actitudinal de altos y estables niveles de legitimidad con bajos y frágiles índices de popularidad, lo que es una combinación posible mas no necesaria de los sistemas políticos contemporáneos.¹⁶ A su vez, alrededor de 55% habría declarado que nunca votaría por el PRI, lo que constituía la disposición social en términos de

¹⁴ Weil utiliza la satisfacción como indicador de legitimidad; Swartz, la confianza. Véase Swartz, Turner y Tuden, "Antropología política: una introducción", *Alteridades*, año 4, núm. 8, México, UAM-I, DCSH, DA, 1994, pp. 101-126.

¹⁵ Las cifras del Distrito Federal de 1995 a 1997 provienen de la serie de 12 estudios muestrales cuyo diseño y dirección estuvieron a cargo de Nicolás Loza, con el patrocinio de Servicios de Imagen y Publicidad S.C.

¹⁶ La combinación contraria la ejemplificó De Gaulle: su popularidad contribuyó a legitimar a la V República francesa. Véase Michel Dobry, *Sociología de las crisis políticas: la dinámica de las movilizaciones multisectoriales*, España, Siglo XXI, 1988, p. 245; otro es el caso mexicano de 1988: "la falta de legitimidad que Carlos Salinas experimentó al principio de su sexenio como presidente fue llenada poco a poco con una amplia aprobación popular". Véase Moreno en Roderic Ai Camp, *Encuestas y democracia: opinión pública y apertura política en México*, México, Siglo XXI, p. 216.

legitimidad estricta menos favorable a figura alguna del viejo régimen, mientras que apenas 15% reveló intención de votar por ese partido, repitiendo la dupla más legitimidad que popularidad.

¿Cuál fue la evolución de estos indicadores dos años atrás? Si en junio de 1997, 13 de cada 20 adultos del DF habrían considerado legítima la autoridad presidencial en tanto que 5 la cuestionarían, en enero del mismo año la suscribió 65% y dos meses después 73%. Sin embargo, en noviembre de 1996, sólo 11 de cada 20 la compartieron (gráfica 1: línea con triángulos). En el terreno metodológico, la discrepancia de 18 puntos porcentuales entre noviembre de 1996 y marzo del año siguiente debe ser explicada. En situaciones históricas de continuidad institucional, sean de gran estabilidad o incluso de cambio gradual, se espera menos volatilidad, por lo que se atribuyen las discrepancias a la experimentación en la forma de interrogación, dejando en segundo plano la variación estadística, así como los posibles pero improbables movimientos de opinión: en noviembre de 1996, el indicador tuvo cuatro opciones de respuesta, los demás cinco, y en todos, una sola opción de respuesta recogió la negativa a legitimar al presidente, en tanto que otra registró la ignorancia y la no respuesta; por si fuera poco, las tasas de no respuesta ilustran que esta pregunta fue cognitivamente una de las más complejas.

Otra forma de evaluar la calidad del estimador fue aplicándolo a otras figuras o a muestras diferentes. En junio de 1997, 76.6% de ciudadanos habría concedido derecho de legislar a los diputados federales, ilustrando de paso que en esta dimensión del respaldo la autoridad legislativa concitaba menos resistencias que la presidencial. En 1998, alrededor de 87% de queretanos habría legitimado al presidente; un año después, en el Estado de México, 87% de adultos concedió autoridad a la presidencia y 89% al gobernador. Ese mismo año, en los municipios de Zacatecas y Guadalupe, 96% habría otorgado legitimidad al presidente, 98% al gobernador y 94% a los diputados federales. Por su parte, en 1999 sólo 3.4% de diputados locales de 12 estados habría cuestionado el derecho de mando del presidente Zedillo, 5.7% de su gobernador, en tanto que para 99% los diputados federales eran legisladores legítimos.¹⁷ Estas cifras confirman tres *estados actitudinales simultáneos* que disipan las dudas en torno a la calidad del indicador: primero, el *consenso favorable*¹⁸ en la legitimidad presidencial, creencia muy probablemente compartida por al menos tres cuartas partes

¹⁷ Las cifras de Querétaro y el Estado de México provienen de Nlo/Sip; las de Zacatecas de Nlo/UAZ; las de diputados locales, del proyecto *Cultura política y práctica legislativa* a cargo de Álvaro López y Nicolás Loza. La información completa puede consultarse en <http://uads.reduaz.mx/~nloza/>

¹⁸ Según Mann, si entre 100 y 75% de la población comparte orientaciones positivas hacia la democracia, gozará de *consenso favorable*; entre 60 y 75%, de *disenso favorable*; entre 40 y 60%, de *disenso*; entre 40 y 25%, de *disenso negativo*; menos de 25%, de *consenso negativa*. Citado por Víctor Manuel Durand y María Marcia Smith, *Construcción de escalas para la medición de la cultura política de masas*, México, IIS/UNAM, 1996, p. 8.

de los mexicanos; segundo, que en un segmento de la élite política, si no es que en toda, la legitimidad presidencial era menos cuestionada que entre los ciudadanos, y por último, que los pobladores del DF eran más escépticos que los del resto del país.

En su popularidad retrospectiva, en julio de 1995 Zedillo contó con la aprobación de poco menos de 47% de ciudadanos, cifra que aumentó 11 puntos porcentuales un año después, para situarse en 59% en los meses de enero a marzo de 1997 y bajar a 49% en junio, cuando en escala nacional lo habrían aprobado alrededor de 52 de cada 100 mexicanos (gráfica 1: línea con rombos). Estas proporciones resultaron un poco más altas que las de *Reforma*, cuyas cifras de aprobación oscilaron entre 33 y 41% en 1996, y entre 47 y 43% en 1997.¹⁹ Y si bien las diferencias podrían ser variación estadística, es más plausible que deriven de las formas de interrogación: mientras *Reforma* preguntó sobre *el trabajo del presidente Zedillo* nosotros preguntamos la *opinión sobre el presidente Zedillo*. En 1998, empleando la misma interrogación que en el DF, alrededor de 75% de queretanos emitió un juicio retrospectivo positivo, lo que reiteró el muy probable diferencial de popularidad entre la ciudad de México y el país.

En sus evaluaciones prospectivas de la presidencia, los ciudadanos fueron menos complacientes que en sus juicios retrospectivos: en julio de 1995: 22% pensó que habría un buen final de sexenio; en diciembre de 1996, 16%; para junio de 1997 esa cifra fue de 33% (gráfica 1: línea con rayas de marcador). En las 12 observaciones realizadas entre 1995 y 1997 la variación concomitante entre los juicios prospectivo y retrospectivo *agregados* fue de 82%, mientras que en junio de 1997 la correlación entre ambas en lo individual fue de 55%, que plantea la dosis de aleatoriedad con que las personas contestan.²⁰

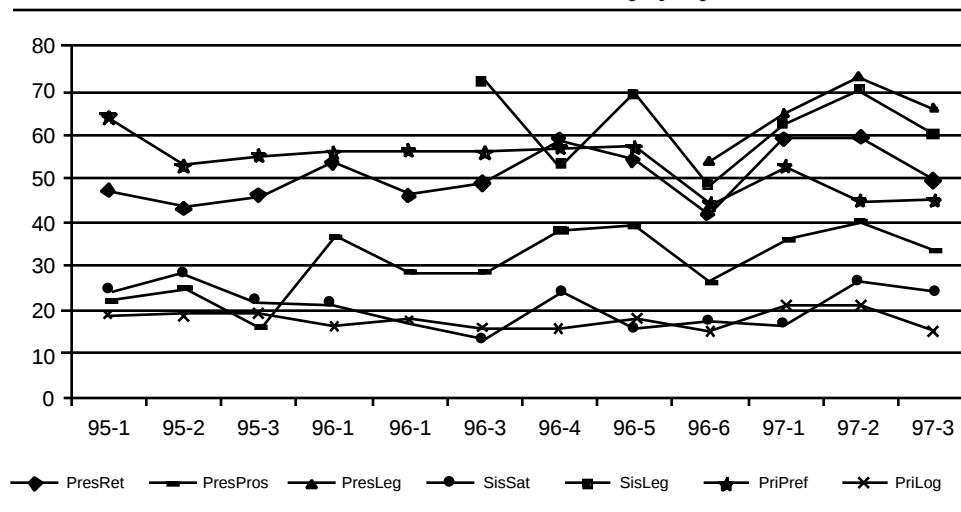
¿Cuáles fueron los saldos de popularidad del presidente frente a sus pares internacionales, sus antecesores y la autoridad local? Zedillo gozó de alta popularidad si la comparación se hace con América Latina y se mantuvo en el *estándar* de los países desarrollados.²¹ En 1997, de ocho naciones consideradas, sólo el primer ministro francés y el presidente estadounidense superaron los niveles de aceptación del mexicano. El presidente francés y los primeros ministros alemán y español eran calificados positivamente por cerca de 41 y 47% de sus poblacio-

¹⁹ Cifras tomadas de Luis Manuel Estrada, *Candidatos y voto estratégico en la primera elección de jefe de gobierno del DF*, México, ITAM, 1999, p. 29.

²⁰ En ambos casos, a 99% de confianza.

²¹ México, *Reforma* y *El Norte, Reforma*, 3 de junio de 1997, *n* = 1 112; Perú: Analistas y Consultores, *El Economista*, 23 de junio de 1997, *n* = 400; Argentina: Rouvier y Asociados, *El Universal*, 30 de junio de 1997, *n* = 600; Brasil: Datafolha, *Excelsior*, 1 de julio de 1997, *n* = 15 688; Venezuela: Mercanálisis, *El Universal*, julio 8 de 1997, *n* = 1 000; España: Centro de Investigaciones Sociológicas, *El Universal*, 29 de agosto de 1997; Estados Unidos: *The Washington Post/ABC*, *La Jornada*, 30 de agosto de 1997, *n* = 1 526; Alemania: Cadena Pública de Televisión ZDF, *El Universal*, 17 de mayo de 1997, *n* = 1 232; Francia: Primer Ministro y Presidente, Gallup, *El Universal*, 10 de julio de 1997.

GRÁFICA 1 1995-1997: Siete dimensiones del apoyo político actitudinal



FUENTE: Sip/Nlo, 1995-1997.

nes respectivamente, mientras que la aprobación a los presidentes latinoamericanos se situó entre 14 —Menem en Argentina— y 39% —Cardoso en Brasil.

En México, a principios de 1989 Salinas alcanzó 79% de aceptación retrospectiva, mientras que entre capitalinos fue diez puntos porcentuales más baja. Sin embargo, los dos registros fueron altos si tomamos como referencia que un año antes 26% aprobó a De la Madrid y que la investidura presidencial de Salinas fue acompañada de una extendida incredulidad en la legalidad y limpieza del proceso del que resultó electo.²² Por su parte, al final del sexenio de Salinas, la popularidad del presidente siguió siendo alta, incluso en comparación con De la Madrid y López Portillo. En cuanto a las transiciones sexenales, en el cambio De la Madrid-Salinas los saldos de popularidad favorecieron al segundo y en la transición Salinas-Zedillo, al primero. Frente al regente del DF la popularidad de Zedillo fue más elevada, pues la cifra de capitalinos que aprobó la gestión del primero en 1997 osciló entre 29 y 31 por ciento.²³

En cuanto al sistema, de 1995 a 1997 quienes expresarían satisfacción con su funcionamiento fueron alrededor de 24% (gráfica 1: línea con círculos). En 1994, otro investigador reportó 31% de ciudadanos satisfechos. En la satisfacción, la diferencia local/nacional apareció de nuevo, ya que mientras en 1991 cerca de 28% de ciudadanos la expresó, en el ámbito nacional esta cifra habría estado cerca de 35%. Si pensamos la satisfacción como un juicio retrospectivo mediado

²² Arturo Sánchez (comp.), *Elecciones a debate. 1988: las actas perdidas*, México, Diana, 1994, 230 p.

²³ Luis Manuel Estrada, *ibid.*

de la utilidad del régimen, el saldo de sus rendimientos fue negativo, pero podríamos aceptar que tiene un componente emocional y quizá cultural que toca las piezas completas de la política. Paradójicamente, las cifras de 1997 y 1991 no fueron muy distintas a las de Almond y Verba en 1959, cuando 32% de capitalinos y 28% de mexicanos se declararon satisfechos.²⁴ Por supuesto, su ligera disminución concuerda con la lógica temporal del régimen, pero intriga la persistencia si se considera que para fines de los cincuenta el sistema transitaba por la cúspide de sus rendimientos, mientras que en los noventa agonizaba.

¿Qué explicaciones podrían ofrecerse a la insatisfacción política duradera? Para el culturalismo, exhibiría el lazo atado por la tradición entre las personas y el sistema; una propuesta individualista y racional argumentaría que deriva de una regla de decisión que indica que sólo se repiten las evaluaciones si aparecen resultados atípicos; Budon señala otra pista, pues para él cifras de insatisfacción parecidas podrían ocultar estructuras de oportunidades diferentes: aunque en 1959 el monto de ganancias a repartir —PIB— y de apostadores —individuos con expectativas de movilidad social ascendente— era menor al de los noventa, también los ganadores —quienes lograban *ascenso social*— eran pocos pero proporcionalmente más y con expectativas *positivas* de seguir ganando. Para 1997, una estructura del juego quizás inversa producía cifras semejantes.²⁵

¿Dónde situar la satisfacción de los pobladores del DF respecto de otros casos nacionales o locales? De un listado no exhaustivo de 16 naciones, México y Hungría acusaban las más altas proporciones de insatisfechos en 1995, lo que los colocaba —junto a Venezuela, Japón, India y España— en el club de los regímenes que no producían la satisfacción de más de 30% de gobernados. Por su parte, Gran Bretaña, República Dominicana, Francia, Chile, Costa Rica, Tailandia, Islandia y Alemania tenían entre 40 y 60% de ciudadanos satisfechos. Y sólo Canadá y Estados Unidos superaban estos umbrales: el primero con 62% y el segundo con 64%.²⁶ En lógica cultural, podría resaltarse que los cinco países con mayores proporciones de población satisfecha no son de tradición católica, y cuatro cuentan con un largo historial democrático. En cambio, de las cinco naciones con más población insatisfecha, cuatro son de fuerte tradición católica, y en tres no se consolida la democracia. Si correlacionamos los niveles de desarrollo a los de satisfacción actitudinal, no obtenemos resultados significativos.²⁷

²⁴ Jorge Domínguez y James McCann, *Democratizing Mexico: Public Opinion and Electoral Choices*, EUA, The Johns Hopkins University Press, 1996, p. 39.

²⁵ Raymond Budon, "The Logic of Relative Frustration", en Jon Elster (ed.), *Rational Choice*, Nueva York, New York University Press, 1986, p. 174.

²⁶ Gallup, *Encuesta mundial de valores*, 1995.

²⁷ La correlación entre satisfacción y tradición católica fue de -0.52; entre satisfacción y democracia consolidada, de 0.51; ambas significativas a 95% de confianza. El índice de desarrollo humano del PNUD no se correlacionó significativamente con la satisfacción.

En la dimensión estricta, para 1995 cerca de 67% de capitalinos habría legitimado el régimen; en enero de 1997, 62%, y en junio de ese mismo año, 60%; quienes dijeron no obedecerlo u obedecerlo por coacción, negándole discursivamente legitimidad, pasaron de 31 a 34% en junio de 1997 (gráfica 1: línea con cuadros).

En estos años, el PRI resintió las disposiciones sociales menos favorables a figura alguna del *antiguo régimen*. Para 1991, sólo dos de cada diez mexicanos y tres de cada diez capitalinos habrían descartado a este partido; en 1994 la situación seguía siendo semejante nacional y localmente, pero de entonces a junio de 1997 en el DF se multiplicaron casi por dos los que lo descontaron por completo (gráfica 1: línea con signos de multiplicación). De manera convergente, *Reforma* registró que para junio de 1997 la contraintención de voto PRI fue compartida por alrededor de 50% de capitalinos.²⁸ Sin embargo, el brinco hacia arriba de la contraintención entre noviembre de 1995 y junio de 1996 sugiere que esta evaluación integra creencias duraderas, estables y difícilmente reversibles, con actitudes circunstanciales, impulsadas por información de coyuntura como las campañas electorales.²⁹

Como en los demás indicadores de respaldo, la cifra de contraintención de voto nacional de 1994 confirma que los juicios fueron más escépticos en el DF que en el resto del país: la contraintención de voto PRI en Querétaro en 1998 —donde el PAN ganó la gubernatura— fue compartida por 30% del electorado; en 1999, en el Estado de México —donde el PRI conservó la gubernatura pero el PAN superó la frontera de 40% de votos— fue suscrita por 30%; en los municipios de Zacatecas y Guadalupe, seis meses después de la victoria del PRD en la elección de gobernador, fue de apenas 22 por ciento.

En la misma ciudad de México, en septiembre de 1996, alrededor de 1% de capitalinos se hubiera declarado dispuesto a votar por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) en caso de que se convirtiera en partido legal, 11% por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y 8% por cualquiera de los dos. Dicho de otra forma, 20% estaba dispuesto a legitimar a estas organizaciones político-militares una vez que ganaran su integración institucional, lo que representaba poco menos de la mitad de quienes legitimaban al PRI. Por su parte, en 1968, 55% de italianos declaraba que nunca votaría por los comunistas, proporción que bajó 18 puntos en 1971, cuando esta agrupación pasó a formar parte de la coalición gobernante, al tiempo que la ilegitimidad de los neofascistas se extendía entre 32 y 44% de la población. Un ejemplo más es Israel, donde en 1969 sólo 3% declaró que nunca votaría por el Herut, que algunos años atrás

²⁸ Luis Manuel Estrada, *ibid.*, p. 17.

²⁹ En México, el efecto de las campañas sobre las creencias menos volátiles ha sido documentado para la ideología y la identificación partidaria. Véase Alejandro Moreno, "Ideología y voto: dimensiones de competencia política en México en los noventa", *Política y Gobierno*, vol. VI, núm. 1, México, primer semestre de 1999, pp. 45-81.

figuraba escindido de la fundación del Estado y cercado por el aislamiento propiciado por su rival.³⁰

Los problemas de legitimidad del PRI, sin embargo, tuvieron un significado especial derivado de la naturaleza del viejo régimen. En un sistema democrático, la erosión en la popularidad, incluso en la legitimidad del partido X y los incrementos en las preferencias por Y o Z, cabrían en la normalidad institucional: representarían las dificultades de un jugador pero no las del juego ni mucho menos de sus reglas. Si la desgracia tocara a todos los partidos estaríamos en la peculiar situación de reglas del juego válidas con jugadores desacreditados, lo que conforme al argumento de Weil vulneraría al juego mismo. ¿Fue ésta la situación de los demás partidos? La respuesta es no: en junio de 1997, la ilegitimidad del PRI fue acompañada por la contraintención de voto PAN y PRD de apenas 14 y 16%, respectivamente. Pero el papel del PRI hacía pensar que sus problemas de legitimidad se trasladarían a la presidencia y al sistema en su conjunto, o bien que convertidos en votos abrirían las puertas de una victoria opositora en el momento en que el sistema electoral se democratizara. Y como el formato tripartidista del sistema de partidos favorecía al PRI,³¹ se abrió un desafío particular a la traducción conductual de la contraintención de voto: su simple oscilación numérica implicaría alcanzar o no umbrales decisivos.³² Dicho de otro modo: la escasa legitimidad del partido X en el gobierno podría representar el catalizador de que niveles de popularidad presidencial por debajo de 50% condujeran a la coordinación de voto.

En este amasijo se contenían las paradojas actitudinales en que el sistema se desenvolvió en el DF entre 1995 y 1997: si ni la presidencia ni el régimen político experimentaron graves problemas de legitimidad, ¿por qué los tuvo el PRI?; si la insatisfacción con el funcionamiento del sistema fue tan baja, ¿por qué no ocurrieron ni una crisis de legitimidad del régimen que derivara en ingobernabilidad ni tampoco acciones extrainstitucionales con fuerte respaldo popular orientadas a modificar el arreglo político nacional?; si la gestión presidencial logró la aprobación de cerca de la mitad de los ciudadanos, ¿por qué el partido del presidente no contó con índices semejantes de popularidad?; ¿por qué la diferencia tan amplia entre la legitimidad del régimen y la satisfacción que este arreglo político generó? Para comprenderlo, se repasarán otros indicadores.

Según Lipset, la "legitimidad implica la capacidad del sistema para engendrar y mantener la creencia de que las instituciones políticas existentes son las más apropiadas para la sociedad";³³ en este caso, su indicador fue el deseo de

³⁰ Levite y Tarrow, *ibid.*, pp. 305 y 314.

³¹ Beatriz Magaloni, "Dominio de partido y dilemas duvergerianos en las elecciones presidenciales en México 1994", en Elizondo y Nacif (comps.), *ibid.*, pp. 229-250.

³² Véase Thomas Schelling, *Micromotivos y macroconducta*, México, FCE, 1989, p. 84.

³³ Lipset, *El hombre político: las bases sociales de la política* Madrid, Tecnos, 1987, p. 67.

los gobernados de lograr cambios institucionales profundos. En 1995, 45% de entrevistados señaló que el país necesitaba cambios muy rápidos, y 28%, simplemente rápidos; un año después, 31% suscribió la idea de que convenían cambios muy rápidos, y 28%, rápidos. En septiembre de 1995, cuando la interrogación opuso cambio gradual a radical, el primero fue preferido por 43% y el segundo por 48%. En noviembre de 1996, cerca de 65% consideró que México necesitaba una nueva constitución política.

Aunque es imposible precisar el contenido de la transformación deseada, éste puede ilustrarse. En septiembre de 1995, 48% de capitalinos hubiera preferido cambios con un partido de oposición en la presidencia y 36% con el PRI en el ejecutivo; 72% habría optado por profundizar la democracia y 15% por mantenerla en el nivel existente; 26% se inclinaría por un presidente tan controlado por los legisladores que no pudiera actuar con autonomía, mientras que 63% lo haría por uno vigilado pero autónomo. En noviembre de 1996, cerca de 21% se habría inclinado por una presidencia fuerte, supervisada por diputados y senadores, pero que tomara las decisiones más importantes del país, contra 31% que optaría por un ejecutivo fuerte que compartiera sus decisiones con los legisladores, en tanto que 6% se habría inclinado porque el legislativo tomara solo las decisiones. Al contrastar las preferencias por el cambio institucional con la legitimidad estricta del régimen y la presidencia, se impone la interrogante de si es posible la dualidad. En términos puramente lógicos la respuesta es sí, que es posible porque la legitimidad estricta supone asumir voluntariamente las consecuencias prácticas de una autoridad constituida conforme a la regla, en tanto que la preferencia por el cambio institucional implica que es deseable una nueva regla para constituir la autoridad.

Al pensar el tránsito de lo discursivo a lo conductual podría plantearse que si la insatisfacción con el régimen, la cuestionada legitimidad del PRI, la escasa popularidad presidencial prospectiva o la demanda de cambio gobernarán la acción, la transición se habría producido antes y con mayor radicalidad. Pero si los niveles de legitimidad del régimen y la presidencia, así como la popularidad retrospectiva del presidente comandaran las prácticas de las personas, el cambio, ya no digamos de régimen sino siquiera de partido en el gobierno, quizá no habría ocurrido. La dualidad actitudinal contiene un acertijo conductual.

Entre actitudes y acción existe un complejo tejido: si las primeras son posibles antecedentes de la segunda, las conexiones de la red pueden imaginarse como filtros. Veamos un ejemplo. Puestos a elegir entre un conjunto de acciones para concretar el cambio deseado, 60% dijo que votaría por un partido de oposición, tres de cada diez acudirían a manifestaciones, menos de 40% participaría en algún partido distinto al PRI y más de 60% se afiliaría a una organización social. Al calificar las acciones de los otros, seis de cada diez aprobaron votar por un partido de oposición y cinco participar en manifestaciones. Para cuestio-

nar a la autoridad, tres de cada diez aprobaron no pagar impuestos, 39% desobedecer al gobierno y 8% enfrentarlo incluso violentamente. Al explorar si desobedecerían al gobierno en señal de protesta, sólo dos de cada diez contestaron que sí. En la práctica, un año después, aunque poco más de siete de cada diez electores del DF votaron por partidos distintos al PRI, la cifra representó apenas 45% de adultos, la tasa de afiliación partidaria no fue de 40%, la participación en organizaciones sociales no alcanzó a seis de cada diez ni la participación en manifestaciones a tres de cada diez. La brecha entre quienes aprobaron la desobediencia —casi cuatro de cada diez capitalinos— y los que estarían dispuestos a ejercerla —no más de dos— ilustró la merma que va de las disposiciones a la acción.

La red de creencias que llevan a la acción anuda más o menos los siguientes hilos: dos hebras fuertes evalúan la figura sobre la que se actuará y el tipo de acción que se considera; otra, la importancia que para la persona tiene su propia percepción de la acción. Otras más constituyen predisposiciones generales como los valores del individuo, su aversión al riesgo o su tolerancia a la frustración. Por último, una hebra integra los desencadenantes de la acción, que en el plano mental implican la representación de la estructura de oportunidades de la situación y las creencias en torno a la participación de los otros, cuyo umbral decisivo será su *masa crítica*.

En el debate que atraviesa este campo del conocimiento, cuestionar los efectos conductuales de las actitudes es importante. Las teorías de la elección racional plantean que si la cooperación dependiera del altruismo de las personas, sería muy difícil. Para explicar la obediencia son más importantes los incentivos selectivos, es decir, el desempeño y capacidad coactiva de un agente central. Downs sostiene que la existencia de bienes públicos vuelve imposibles los óptimos de Pareto a través de la cooperación voluntaria,³⁴ argumento desarrollado más tarde por Olson, quien añadió factores de escala.³⁵ Para Wright, la distinción entre *consenters*, *dissenters* y *assenters* matiza las consecuencias de las creencias en función del interés y el activismo político de las personas,³⁶ idea no muy distinta de la de Zaller.³⁷ Deutsch sostendría una suerte de fatalidad actitudinal al afirmar que “las leyes se vuelven difíciles de imponer cuando menos de 90% de la población las obedece voluntariamente”,³⁸ conteniendo el argumento fuerte de las teorías de la cultura política.

³⁴ Anthony Downs, *op. cit.*, pp. 170-173.

³⁵ Mancur Olson, *La lógica de la acción colectiva, bienes públicos y la teoría de grupos* México, Limusa, 199 p.

³⁶ Citado por Michel Dobry, *op. cit.*, pp. 255-256.

³⁷ John Zaller, *The Nature and Origins of Mass Opinion*, Cambridge, Cambridge Press, 1998, 367 p.

³⁸ Karl Deutsch, *Política y gobierno*, México, FCE, 1976, p. 30.

Para reconstruir el paso de las actitudes a la acción, convendría diferenciar las consecuencias de unas actitudes sobre otras de sus efectos sobre las conductas. En la relación actitud/actitud, una evaluación negativa de la figura *X* no tendría por qué traducirse en una negativa de otra figura: no tendría que dominar el efecto *derrame* sino que podrían presentarse *compensaciones* o *exclusiones*.³⁹ Otro vínculo relevante en esta relación se construiría desde el nivel de interés e información políticas del individuo. Por su parte, la relación entre las creencias generales respecto del sistema político y las disposiciones más próximas a la acción estaría mediada por consideraciones de costo beneficio y predisposiciones. Una propuesta sería que las preferencias son factores causales pero no las causas únicas y ni siquiera las decisivas: las disposiciones son parte del modelo mental que junto al sistema institucional ofrecen incentivos y restricciones para la acción.⁴⁰

DE LAS DISPOSICIONES A LA ACCIÓN

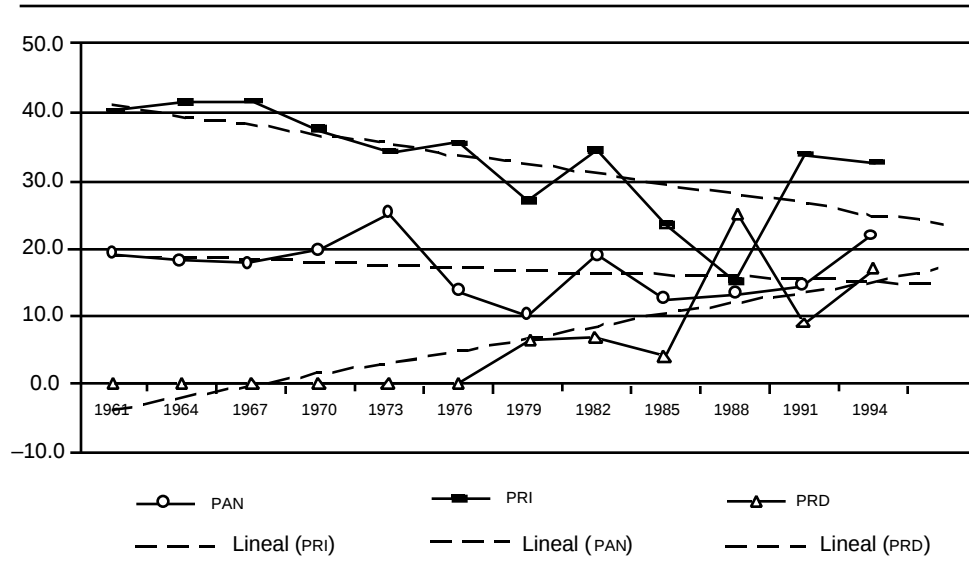
¿Cuál fue la relación entre el respaldo actitudinal al régimen y las disposiciones a la acción electoral? Se acudirá a dos tipos de análisis: por un lado, describiendo las variaciones concomitantes entre un par de indicadores situacionales y los datos agregados de los 12 estudios de opinión realizados entre 1995 y 1997 en el DF; por el otro, haciendo un examen transversal de datos individuales correspondientes al doceavo estudio, aplicado un mes antes de la elección local. En el primer caso se tratará de ver qué relaciones ocurrieron en el agregado; en el segundo, se explicitará la lógica individual detrás de esas relaciones. Se empezará describiendo las preferencias electorales en el periodo en estudio.

De 1961 a 1994, el comportamiento electoral de los capitalinos dibujó una tendencia desfavorable al PRI, positiva a las oposiciones de izquierda y ligeramente contraria al PAN (gráfica 2); sus proyecciones lineal y logística al 97 resultaban en un PRI ganador y un PRD alcanzando la primera oposición en competencia con el PAN. La reforma electoral de 1996 abrió la puerta a una competencia electoral nunca antes experimentada, pero el formato tripartidista del sistema de partidos y de las preferencias de los electores hacían difícil la victoria de la

³⁹ “El *efecto compensación* indica que si un individuo no se conduce según *P* en *X*, entonces lo hará en *Y*. A esto deberíamos añadir el *efecto exclusión* si un individuo se comporta según *P* en *X*, no lo hará en *Y*. Si el *efecto compensación* y el *efecto exclusión* aparecen simultáneamente, producirán un *efecto de suma-cero*”. Elster, “A Plea for Mechanisms”, en Peter Hedstrom y Richard Swedberg (eds.), *Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social Theory*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, pp. 45-71.

⁴⁰ Denzau y North, “Shared Mental Models: Ideologies and Institutions”, en Lupia, McCubbins y Popkin (eds.), *Elements of Reason: Cognition, Choice, and the Bounds of Rationality* Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 24.

GRÁFICA 2 DF: Resultados y tendencias electorales 1961-1997

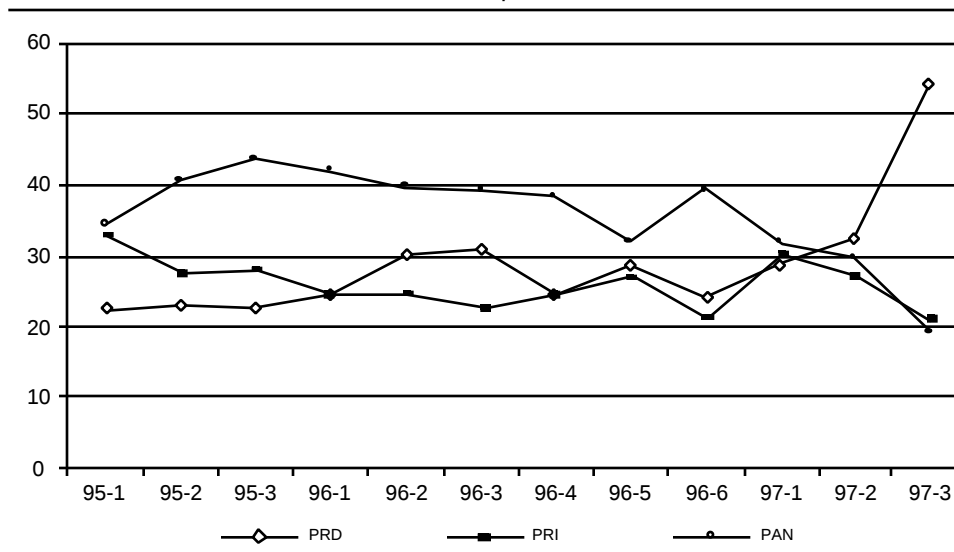
FUENTE: Banamex, *México electoral*.

oposición si antes no se desplomaba la preferencia PRI u ocurría un fenómeno de voto estratégico que llevara a los electores de la segunda oposición a votar por la primera oposición.

Hacia mediados de 1995 los dos partidos mejor colocados entre los electores del DF eran el PAN y el PRI (gráfica 3). Hasta finales de 1996, el PAN conservó su clientela, pero conforme transcurría la campaña la perdía ligera pero permanentemente. Para principios de 1997 no sólo no atraía electores volátiles sino que empezó a experimentar la deserción de algunos leales. Por su parte, para mediados de 1995 el PRI contaba con la preferencia de alrededor de 30% del electorado, que se mantuvo estable hasta el principio de la campaña. Al inicio de 1997, tras un proceso democrático mas no universal de selección de su candidato, parecía bien colocado para enfrentar el antipriísmo de cerca de la mitad de ciudadanos. El PRD, por último, partiendo de una buena mas no privilegiada posición, postuló a su mejor candidato en una campaña exitosa. Pronto abandonó el cambio y se convirtió en el opositor con posibilidades de derrotar al PRI. De enero a julio de 1997, el PAN perdió 50% de sus probables votantes y el PRI 30% de los suyos. Los dos escenarios que hacían posible una victoria opositora se reunían: los electores de oposición parecían coordinar su voto favoreciendo a la oposición más fuerte, al tiempo que el PRI se desplomaba.

¿Cuáles fueron los condicionantes del desplome de la oposición más competitiva y del PRI?, ¿cuáles las del ascenso del PRD?, ¿cuál fue el efecto sobre el

GRÁFICA 3 DF: Intenciones efectivas de voto, 1995-1997



FUENTE: Sip/Nlo, 1995-1997.

comportamiento electoral de las actitudes hacia el sistema político, el presidente y el PRI? Primero se examinará la secuencia del mediano plazo —de 1995 a 1997— a través de indicadores agregados de respaldo actitudinal, las evaluaciones sociotrópica y de bolsillo de la economía y dos variables situacionales: el PIB y el empleo en el DF. Cabe aquí una advertencia metodológica. En general, doce observaciones son pocas,⁴¹ con registros que no acusaron grandes variaciones. Quizá por lo dicho, al correlacionarlas no resultaron significativas. Una más larga serie debería exhibir cambios concomitantes entre estos indicadores. Como sea, las variaciones en la intención PRD se asociaron positiva y significativamente a la contraintención PRI como la misma gráfica 3 sugería, a la preferencia PAN (cuadro 2, en negritas); de las dos variables situacionales, las variaciones en el producto interno bruto se vincularon positivamente a la preferencia perredista. Y que las preferencias PAN se asociaran a las variaciones actitudinales y situacionales se entiende porque fue el partido con mayor variabilidad en sus intenciones de voto, y como el movimiento de sus preferencias fue en la misma dirección que los saldos del PRI, al parecer los electores lo castigaron, pero todo indica que se trata de una asociación sin secuencia causal.

⁴¹ “Cuántas más observaciones, mejor, pero ¿cuántas son necesarias? En la situación más sencilla —en que hay niveles de variabilidad escasos, varianza alta en la variable causal, ninguna correlación entre ésta y las de control y se requieren niveles bastante bajos de certidumbre— se necesitarán pocas observaciones: probablemente más de cinco pero menos de veinte.” Véase King, Keohane y Verba, *El diseño de la investigación social: la inferencia científica en los estudios cualitativos*, Madrid. Alianza Editorial, 2000, p. 230.

CUADRO 2 *Actitudes, preferencias y variables situacionales*

DF 1995–1997, correlaciones

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. PRI	1.000	-.278	.075	.246	.315	-.041	-.180	-.136	.069	.186	.412
2. PRD	-.278	1.000	-.601	.062	.122	.322	.600	.465	.311	-.049	.593
3. PAN	.075	-.601	1.000	-.224	-.318	-.404	-.160	-.715	-.684	-.017	-.790
4. Satisfacción	.246	.062	-.224	1.000	.055	.011	.143	.098	.284	-.399	.670
5. Presidente retrospectiva	.315	.122	-.318	.055	1.000	.822	-.024	.455	.289	.602	.444
6. Presidente prospectiva	-.041	.322	-.404	.011	.822	1.000	.227	.559	.344	.652	.713
7. No PRI	-.180	.600	-.160	.143	-.024	.227	1.000	.471	.436	.259	.328
8. Economía retrospectiva	-.136	.465	-.715	.098	.455	.559	.471	1.000	.989	.414	.939
9. Política retrospectiva	.069	.311	-.684	.284	.289	.344	.436	.989	1.000	.259	.885
10. Bolsillo retrospectiva	.186	-.049	-.017	-.399	.602	.652	.259	.414	.259	1.000	.156
11. Bolsillo prospectiva	.412	.593	-.790	.670	.444	.713	.328	.939	.885	.156	1.000
Desempleo	.094	-.560	.809	-.116	-.302	-.498	-.571	-.814	-.721	-.348	-.652
PIB	-.202	.714	-.782	-.192	.358	.593	.489	.703	.549	.391	.592

La única variable actitudinal que se asoció a la preferencia política —la contraintención PRI a la intención PRD— contiene el nudo del acertijo de la elección de 1997: sólo un fenómeno particular de interacción social podía producir la victoria opositora. Y la incapacidad del PAN para erigirse en primera oposición en la elección local hizo que el factor estratégico entrara en acción meses antes al día de la votación y en franjas de población relevantes, lo que también se expresó por la fuerte correlación entre las preferencias PRD y PAN.

En el análisis transversal e individual, el respaldo actitudinal al régimen adquiere relevancia al explicar las preferencias PRI y PRD (cuadro 3). Una regresión logística binaria ilustra que evaluar positivamente al presidente multiplicó por dos la probabilidad de votar por su partido, en tanto que sentir satisfacción con el funcionamiento del sistema la elevó 50%. De las disposiciones

CUADRO 3 *Preferencias electorales y apoyo actitudinal**

Modelos de regresión logística

	PRI	PRD	PAN
<i>Variables independientes</i>	<i>EXP β (error)</i>	<i>EXP β (error)</i>	<i>EXP β (error)</i>
Sistema: satisfacción	1.53 ^a (.133)	.966 (.093)	.980 (.121)
Sistema: legitimidad	1.05 (.282)	.640 ^a (.157)	1.055 (.212)
Presidencia: retrospectiva	1.99 ^a (.120)	.687 ^a (.067)	1.008 (.088)
Presidencia: prospectiva	1.15 (.078)	.957 (.052)	.989 (.068)
Presidencia: legitimidad	2.42 ^b (.415)	.838 (.166)	.955 (.224)
PRI: legitimidad	10.16 ^a (.279)	.335 ^a (.144)	.696 (.191)
<i>Bondad de ajuste</i>			
Pronóstico otro	96.1	79.2	100
Pronóstico partido	47.3	51.4	0
Pronóstico correcto	88.4	68.0	86.4
c ² / grados de libertad	346.126/6 ^a	197.401/6 ^a	4.400/6
Nagelkerke R ²	.476	.228	.008
N	1 066	1 066	1 066

^a Significativo a 0.01; ^b significativo a 0.05. Si del modelo PRI excluimos su contra intención de voto el pronóstico correcto es 36% y la R² de Nagelkerke 0.358.

* Para la lectura de cuadros: las primeras cifras de cada celda, que corresponden a la columna de las EXP b, son razones de momios derivadas del exponencial de las betas de la ecuación. La cifra entre paréntesis, el término de error de las betas. Las variables independientes, salvo presentación categorizada (como en el caso de los indicadores de legitimidad estricta), son incluidas de forma continua, declarando *missing* la no respuesta. Los subíndices de los EXP b—son niveles de significación. Los indicadores de calidad del modelo son los valores de la c², la R² y la proporción de casos correctamente pronosticados. Véanse Hosmer y Lemeshow, *Applied Logistic Regression*, Nueva York, Wiley & Sons, 303 p.; Scott Menrad, *Applied Logistic Regression Analysis*, USA, Sage University Paper, 1989, 98 p. (Series: Quantitative Applications in the Social Sciences, 106).

Política y Cultura, primavera 2003, núm. 19, pp. 145-168

instrumentales del respaldo, la menos impactante fue pensar que las cosas mejorarían al final de sexenio. De los indicadores de legitimidad estricta, concederle derecho de mando a la presidencia estuvo más vinculado a la preferencia PRI que otorgárselo al sistema, que por lo demás tampoco tuvo significancia estadística. Si excluimos la contraintención PRI, sólo cinco indicadores de apoyo político al régimen dieron cuenta de 35% de la variación en la probabilidad de votar PRI, con un sobreajuste en el modelo, dado el bajo nivel de pronóstico correcto.

Para el PRD tres indicadores del apoyo político al régimen y a sus piezas explicaron 22% de la variación y pronosticaron correctamente 51% de sus votantes; negarle legitimidad al PRI elevó 67% la probabilidad de preferirlo, en tanto que negársela al sistema y reprobar al presidente la incrementaron poco más de 30%. De la preferencia PAN nada hay que decir, pues no se asoció significativamente a ninguna de estas actitudes, lo que es consistente con la coordinación de voto.

Al modelar con variables instrumentales, predisposicionales, de información y estratégicas, las preferencias PRI, PRD y PAN se explican mejor que si únicamente empleamos el respaldo actitudinal (cuadro 4). Las cinco variables que ahora se usarán pueden enmarcarse en tres vertientes teóricas. La evaluación de bolsillo, la expectativa de partido ganador y la ideología podrían ajustar las proposiciones del elector racional. Con *bolsillo* se ilustra la dimensión más sencilla de la teoría: si el partido *X* en el gobierno no produce dividendos satisfactorios y un partido *Y* en la contienda puede ofrecerlos, votar por *Y* es lo racional. En términos operacionales, *bolsillo* fue construida utilizando el indicador estándar y consta de cuatro valores. Por su parte, *expectativa ganador* recoge la dimensión estratégica de la elección de 1997. Desde la perspectiva racional, percibir cerrada una contienda aumenta las probabilidades de participar pero también puede generar un *voto al ganador*. Conforme a Kuran, creer que la oposición ganará abarata los costos de adherírsele y de revelar esta preferencia, aunque cada individuo tendrá su propio umbral.⁴² En lo operacional, *expectativa ganador* se introdujo con tres categorías y el término de comparación fue la expectativa de que ganara el PAN. Obviamente habrá un problema de endogeneidad, pues es natural que los partidarios de *X* consideren que tienen altas probabilidades de ganar,⁴³ pero también esperaríamos efectos diferenciales. Con *derecha e izquierda* se pretendió representar una *señal social* que resumiera la postura de los individuos en relación con los asuntos públicos. Operacionalmente fue una variable ordinal de tres valores que eliminó a quienes no se situaron en

⁴² Timur Kuran, "Ahora o nunca: el elemento de sorpresa en la revolución de Europa oriental de 1989", *Zona Abierta*, núm. 80/81, 1997, Madrid, Pablo Iglesias, pp. 137-197.

⁴³ Elster expone este tipo de *errores de la racionalidad* con la fábula del zorro y las uvas, o, dicho de otro modo, de confundir nuestros deseos con la realidad. Véase *Psicología política*, *ibid.*

CUADRO 4 *Preferencias y variables instrumentales, predisposicionales, de información y estratégicas: modelos de regresión logística*

	PRI	PRD	PAN
<i>Variables independientes</i>	<i>Exp β (error)</i>	<i>Exp β (error)</i>	<i>Exp β (error)</i>
Bolsillo	1.162 ^b (.077)	.931 (.065)	1.009 (.084)
Orientación democrática	1.097 (.123)	1.033 (.102)	1.152 (.128)
Derecha-izquierda	.574 ^a (.089)	1.588 ^a (.060)	.834 ^b (.081)
Conciencia política	.985 (.044)	.959 (.035)	1.016 (.045)
Expectativa ganador (contrasta PAN)			
PRD	12.532 ^a (.534)	35.212 ^a (.487)	.024 ^a (.339)
PR	1.213 (.575)	3.678 ^a (.494)	.048 ^a (.316)
<i>Bondad de ajuste</i>			
Pronóstico otro	93.5	78.3	97.3
Pronóstico partido	32.2	76.3	45.0
Pronóstico correcto	82.5	77.4	89.1
c ² / grados de libertad	215.770/6 ^a	364.781/6 ^a	177.147/6 ^a
Nagelkerke R ²	.376	.476	.332
N	829	829	829

^aSignificativo a 0.01; ^bsignificativo a 0.05.

el continuo ideológico. Tuvo su más bajo valor en la derecha y el más alto en la izquierda.

Conciencia política es un indicador del interés e información de una persona respecto de la política y atenúa las teorías de la elección racional sin abandonar su forma más general ni el supuesto individualista. El concepto fue tomado de Zaller, quien sugiere que los más interesados serán los más informados y los más resistentes a modificar percepciones y conductas. En este caso, *conciencia política* es un índice que articula preguntas acerca del interés autodeclarado en política y los conocimientos de partidos, autoridades y campañas electorales.

El indicador de *orientación democrática* podría evaluar la perspectiva culturalista, esto es, suponer que valores políticos duraderos y de poco contenido instrumental influyen en las preferencias y conductas políticas de las personas. En el modelo se introdujo como índice que resume la respuesta a cuatro preguntas vinculadas a la expresión de valores políticos, como las creencias en torno a la aplicación de la ley o la preferencia en el criterio de elección de un supuesto gobierno de crisis.

Los modelos de preferencias con variables instrumentales, predisposicionales, de información y estratégicas resultaron más poderosos que los contruidos con indicadores de respaldo. Esta primera comparación es modelo a modelo, ningun-

no de los cuales integra ambos tipos de indicadores. Así, para la preferencia PRI las dos variables significativas fueron la evaluación de bolsillo, que incrementó 16% la probabilidad de preferirlo y la posición ideológica, por la que cada desplazamiento de izquierda a derecha se asoció a 43% de disminución en la probabilidad de elegirlo. Por lo que hace al PRD, la única variable significativa fue la posición ideológica, operando exactamente en el sentido inverso al del PRI. Y la preferencia PAN sólo se vinculó significativamente a la ideología, en el mismo sentido pero con menor fuerza que con el PRI.

Pensar que ganaría el PRD se asoció positiva y fuertemente tanto con la probabilidad de preferirlo como de optar PRI. Para junio de 1997, la información que tenían los electores era más precisa y confiable que unos meses atrás e implicaba saber tanto del ascenso perredista como de la caída del PAN y del PRI. La expectativa de que ganara el PRD estaba muy difundida y comenzaba a ser factor para definirse electoralmente. Dadas las circunstancias, lo que debe valorarse es el peso diferencial de esta expectativa: para los priístas, que el PRD pareciera ganador multiplicaba por 12 su probabilidad de ser priísta; para los perredistas, multiplicaba por 35 su probabilidad de votar PRD. Y entre los panistas, suponer que ganaría el PRD disminuía 97% su probabilidad de votar PAN, mientras que pensar que ganaría el PRI la reducía 95 por ciento.

Al correr conjuntamente indicadores de respaldo político y variables instrumentales, predisposicionales, de información y estrategias podemos contar con una comparación completa. Luego, al excluir las no significativas después de pruebas, el modelo de preferencia PRI se integró con cinco variables, tres de ellas de respaldo político; el del PRD con cuatro, dos de apoyo, y el del PAN con cuatro, dos de respaldo. Estos modelos (cuadro 5) dieron las R^2 y las proporciones de pronóstico correcto más altos (cuadros 3 y 4): *los indicadores de respaldo actitudinal fueron eficientes mas no suficientes en la explicación de la conducta electoral de los ciudadanos*

La popularidad presidencial retrospectiva multiplicó por 2.1 la probabilidad de preferir al PRI, disminuyendo 36 y 19%, respectivamente, las de optar PRD o PAN; la legitimidad de la presidencia multiplicó por 2.5 la probabilidad de preferir PRI y no tuvo efectos significativos sobre los otros partidos; la legitimidad del PRI multiplicó ocho veces la probabilidad de preferir al propio PRI y redujo 47% la de optar por el PRD, sin efecto en la preferencia PAN. Por último, la expectativa de que ganaría el PRD multiplicó por 40 la probabilidad de optar por este partido y sus efectos sobre el PAN —negativo— y el PRI —positivo— fueron reducidos; en cambio, la expectativa de que el PRI ganara multiplicó por seis la probabilidad de preferirlo y redujo la de optar PAN. En suma: las variables de respaldo político se revelaron eficientes para dar cuenta de la preferencia por los tres partidos, pero principalmente por el PRI; la ideología tuvo efectos importantes con los signos esperados también para los tres; la variable estratégica resultó

CUADRO 5 *La preferencia electoral en el DF en 1997:
tres modelos de regresión logística*

	PRI	PRD	PAN
<i>Variables independientes</i>	<i>Exp β (error)</i>	<i>Exp β (error)</i>	<i>Exp β (error)</i>
<i>Respaldo actitudinal</i>			
Sistema: satisfacción			.663 ^a (.162)
Sistema: legitimidad			
Presidencia: retrospectiva	2.133 ^a (.134)	.745 ^a (.078)	.816 ^b (.104)
Presidencia: prospectiva			
Presidencia: legitimidad	2.585 ^b (.504)		
PRI: legitimidad	8.777 ^a (.325)	.433 ^a (.206)	
<i>Otras variables</i>			
Bolsillo			
Orientación democrática			
Derecha-izquierda	.655 ^a (.115)	1.544 ^a (.066)	.711 ^a (.090)
Conciencia política		.921 (.040)	
Expectativa ganador			
PRD	1.087 (.623)	40.121 ^a (.548)	.021 ^a (.373)
PRI	6.706 ^a (.566)	5.974 ^a (.558)	.053 ^a (.338)
<i>Bondad de ajuste</i>			
Pronóstico otro	93.6	79.6	97.2
Pronóstico partido	68.8	79.4	43.0
Pronóstico correcto	88.9	79.5	88.9
c ² / grados de libertad	347.756/5 ^a	381.400/5 ^a	173.038/4 ^a
Nagelkerke R ²	.600	.535	.360
N	746	746	746

^aSignificativo a 0.01; ^bsignificativo a 0.05. Si del modelo PRI excluimos su conRAINTENCIÓN de voto, la *satisfacción* se hace significativa, el pronóstico correcto PRI pasa a 63% y la R² de Nagelkerke a 0.531.

decisiva en la exploración de las preferencias PRI y PRD, así como de las deserciones PAN. Por último, ni las variables cultural ni de conciencia política fueron relevantes.

MICROMOTIVOS, MACROCONDUCTA: A MANERA DE CONCLUSIÓN

En este trabajo se trató de mostrar que la escasa legitimidad del PRI resultó capital en su debacle electoral y la victoria opositora, pero fue insuficiente para dar cuenta de los electores que se inclinaron por el PRD y no por el PAN, siendo

los factores estratégico y, en menor medida, ideológico, los decisivos. Este análisis fijó el interés teórico general en las creencias y acciones individuales, particularizando en la relación entre actitudes y actitudes, y entre actitudes y conducta, así como en la urdimbre motivacional tanto de las actitudes como de la conducta y los efectos de la interacción entre actores estratégicos.

En el plano de las creencias individuales y de la relación actitudes y actitudes, la capacidad de los ciudadanos de distinguir entre legitimidad del régimen, eficiencia de la presidencia y legitimidad del partido en el gobierno, ilustra el funcionamiento de mecanismos de compensación antes que de derrame. En la relación entre actitudes y acciones, los componentes instrumental y no racional de la creencia en la legitimidad del PRI podrían explicar sus fuertes efectos conductuales. Por el contrario, el juicio instrumental negativo del desempeño de una autoridad podría quedarse en lo discursivo si no se asocia a otros resortes de la acción, o no influir sobre ésta si no se realizan otras evaluaciones de la autoridad. En la especulación de la trama motivacional de las actitudes y acciones destacan la retroalimentación entre emociones y razones, así como la mixtura motivacional de los juicios sobre la autoridad. Por último, el intercambio de lugares entre las dos principales oposiciones exhibió las limitaciones de las evaluaciones del gobierno y el régimen en la explicación de la preferencia electoral o, dicho de otro modo, del poder causal de la actitud sobre la acción, introduciendo la heurística de la interacción estratégica.

Algunas de estas propuestas explicativas podrían ser provechosas examinando la elección presidencial de 2000 y otros episodios sociales. Las limitaciones, por supuesto, son muchas e invitan a la experimentación, corrección e innovación. Por ejemplo, si bien la satisfacción que producía el régimen entre sus gobernados era baja, no es claro que se altere conforme cambian los gobiernos locales o nacionales, en tanto que su mixtura motivacional aguarda descifrarse; en las distintas evaluaciones de gobierno, si bien la derrama no fue el mecanismo dominante, tampoco es claro cuál sería la creencia con efectos eficientes sobre la acción. En cuanto a las motivaciones de las creencias, no sólo aparecen preguntas apriorísticas que podrían empantanar la investigación —¿todas las creencias están motivadas?—, sino que es limitada la disposición de fuentes empíricas, lo que hace tentadora la especulación. Por su parte, el análisis estratégico conduce a nuevas interrogantes, pues cambiar preferencias ante nuevas creencias puede comenzar siendo oportunista —en el vocabulario del análisis electoral, desalinearse el sistema de partidos— y terminar con una nueva identidad o preferencia fuerte —realinear el sistema de partidos.